

Investigación detalla que más de 100 mil personas viven irregularmente en esos suelos estatales: Estudio revela que 75% de la superficie de las 34 mayores megatomas es de propiedad fiscal

Ministra de Bienes Nacionales reitera que su prioridad es “recuperar, lo antes posible, los terrenos usurpados, mediante las acciones judiciales que correspondan”.

VÍCTOR FUENTES BESOAIN

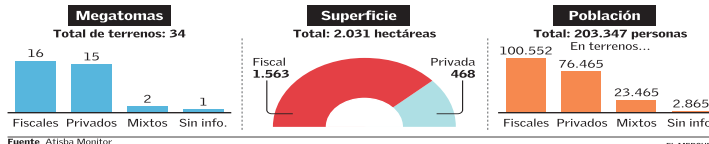
Las principales megatomas que se distribuyen por el país concentran un alto porcentaje de terrenos fiscales. Considerando los 34 mayores asentamientos irregulares en todo Chile, que suman más de 200 mil hectáreas, el 75% de esos suelos corresponde al Estado.

Los antecedentes fueron revelados por un estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor. A esa consultora perteneció, antes de asumir su actual cargo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. La autoridad vendió su participación y renunció.

La investigación resulta relevante como insumo, dada la urgencia manifestada por el Gobierno en torno a recuperar los espacios fiscales ocupados ilegalmente y darles uso legal y público. Así lo ha reiterado, ante consultas de “El Mercurio”, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien al hacerse cargo del tema recalcó que es prioritario para su cartera.

Esta vez, al preguntársele por las acciones en curso, Parot dice que ya se encuentran haciendo un levantamiento de la situación de los terrenos tomados al fisco. Consultada sobre la magnitud de las usurpaciones que afectan espacios y propiedades estatales, la ministra plantea que “estamos actualizando los antece-

Terrenos del Estado predominan en las grandes usurpaciones



“Recuperaremos lo antes posible los terrenos fiscales usurpados, mediante las acciones judiciales que correspondan, en coordinación con los organismos pertinentes”.

CATALINA PAROT
MINISTRA DE BIENES NACIONALES

dentes sobre terrenos e inmuebles fiscales con ocupación irregular, para determinar su situación jurídica y el grado de control efectivo del Estado”.

Respecto de las acciones que lleva a cabo, detalla que “comenzamos a reunirnos con diversas organizaciones y autoridades que conocen en terreno esta realidad, para abordar el problema y encontrar soluciones”.

Parot adelanta que una vez que concluya esta etapa, “co-

menzaremos a recuperar lo antes posible los terrenos usurpados, mediante las acciones judiciales que correspondan, en coordinación con los organismos pertinentes”.

Más suelos disponibles

La directora ejecutiva de Atisba Monitor, Caroline Iribarne, dice que la mayor proporción de terrenos fiscales en las usurpaciones obedece a que “el Estado

El Estado tiene grandes extensiones de terreno y más suelos disponibles. El déficit habitacional y la migración llevaron a soluciones informales vía usurpaciones”.

CAROLINE IRIBARNE
DIRECTORA EJECUTIVA ATISBA MONITOR

tiene grandes extensiones de terreno y, por lo mismo, mayor disponibilidad de suelos”. Agrega que “en su minuto, el déficit habitacional y la presión migratoria llevaron a que muchas personas buscaran soluciones informales vía usurpaciones”.

En cuanto a las capacidades de Bienes Nacionales para establecer la magnitud de los terrenos usurpados, considera que “el problema no es de atribuciones, sino que una capacidad operati-

va y tecnológica para levantar la información, cruzarla y hacer un monitoreo continuo”.

Sobre las herramientas requeridas, la experta detalla que “debe hacerse un catastro georreferenciado, que se base en imágenes satelitales y frente a cualquier modificación del terreno se generen alertas. Hay un desafío tecnológico de resguardo de estos terrenos”.

En relación con los tiempos para concretar el catastro, considera que “seis meses es un tiempo razonable”. Sin embargo, en cuanto a los procesos de desalojo argumenta que

“eso va a ser más lento, porque tenemos varias usurpaciones que se han ido consolidando en el tiempo, con niveles de violencia críticos. Así se puede ver, por ejemplo, en tomas de Antofagasta, de camino a Melipilla o de Cerrillos; entonces, intervenir y recuperar esos terrenos requiere de una acción de desactivación de las redes delictuales que están en los campamentos, porque si no, va a ocurrir lo que pasó en San Antonio, donde hubo disparos”.

“Adoptar medidas como propietario”

Frente a los anuncios de la autoridad, la abogada Jeannette Bruna, experta en derecho urbanístico y académica de la Universidad Católica de Valparaíso, ma-

nifiesta que “es destacable que, al fin, Bienes Nacionales adopte medidas como las que debe aplicar cualquier propietario enfrentado a una toma”.

Recalca que “en este caso, el objetivo tiene que ser recuperar los terrenos de manera directa, sin esperar que haya una sentencia de por medio, como ha ocurrido en los últimos casos”. Hace notar que “en el anterior gobierno, si no hubiera sido por la existencia de sentencias, el Estado no actuaba”. Bruna enfatiza que “la resolución que se dictó a fines de 2024 para formar comités

intersectoriales solo buscaba cumplir desalojos ordenados por sentencias; por lo tanto, no había acción gubernamental pensada en protocolos de desalojo que no fueran dictámenes fijados por la justicia”. Plantea que “el Ejecutivo no debe esperar sentencias para cumplir las acciones que le corresponde tomar día a día”.

A su vez, el urbanista Fernando Pérez Barrientos, director principal de CityLab Biobío, sostiene que buscar la recuperación de los terrenos mal utilizados “es algo que se ha venido planteando desde hace largo tiempo”. Sin embargo, resalta que “es una buena oportunidad para hacerse cargo del déficit habitacional, así como de abastecer a las ciudades de una serie de servicios y equipamientos que tanta falta hacen en distintos sectores”.

PARTICIPACIÓN
Expertos recomiendan consultas ciudadanas frente a paños fiscales que cambien de uso.

Habilitación de zanjas y muros para contener migración irregular y crimen organizado:

Plan Escudo Fronterizo avanza en Arica, se expande a Colchane y alcaldes expresan diversos reparos

Comunas piden mayor participación en la implementación de la iniciativa, más coordinación y advierten sobre los impactos en los traslados de lugareños y en actividades como la ganadería.



TRABAJO CON MAQUINARIA PESADA.— El Ministerio de Obras Públicas informó que el inicio de los trabajos, junto al paso Chacalluta y el límite internacional con Perú, se concentró entre los hitos 2 y 10.



AMENAZAS LATENTES.— En paralelo a las obras, se han intensificado los operativos con incautaciones de drogas, contrabandos y vehículos.

“Quiero que se termine la trata de personas, que Arica no tenga problemas con la mosca de la fruta y que se combata el crimen organizado. Pero también necesitamos que nos informen debidamente”, añade.

Mientras tanto, el comisionado de la macrozona norte, Alberto Soto, explica que “dentro de las medidas que se van a ejecutar en los primeros 90 días está el inicio de los trabajos de antinmigración. Hay zanjas y muros combinados. Hay medidas para detección del tráfico y tecnológicas también. Y esos sectores son del orden de los 400 km en toda la macrozona norte”.

“Pero hay sectores donde la gente no transita, o transita menos, porque es mucho más difícil. Entonces, los esfuerzos del Estado se inician donde hay más tránsito comprobado, más rutas habilitadas, donde físicamente hoy tenemos el problema más grave. No estamos hablando solo de migración regular, estamos hablando de todo lo que transita en una frontera que no está regulada adecuadamente y que son miles de kilómetros”, indica.

Sobre el funcionamiento de los pasos habilitados en la macrozona norte —Chacalluta, Visviri, Chungará, Colchane, Ollagüe e Hito Cajón—, Soto dice que “nuestra intención es mantener o aumentar el grado de actividad, de acuerdo a la particularidad de cada control”.

Colchane, congestionado en los últimos días por el alto flujo de camiones en tránsito a Chile, el viernes fue cerrado en forma temporal por mantención sanitaria. En Visviri y Chungará, casi en paralelo, hubo una fiscalización en terreno de la Contraloría para revisar las instalaciones, el funcionamiento y, según se reportó, “el uso de los recursos públicos de servicios del Estado, como Aduanas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Servicio Agrícola y Ganadero”.

“La primera etapa son 33 km de zanja, habrá que mantenerla y en las siguientes etapas (...) haciendo más barreras físicas para fortalecer nuestras fronteras”.

MARTÍN ARAU
MINISTRO OBRAS PÚBLICAS

“Dos situaciones podrían afectarnos. Uno es el paso ancestral (usado para el comercio y cruce de lugareños) y el tema del ganado, sobre todo cuando construyen una zanja”.

TEÓFILO MAMANI
ALCALDE DE COLCHANE

“Hay medidas para detección del tráfico y tecnológicas también. Sectores son del orden de los 400 km. Los esfuerzos del Estado se inician donde hay más tránsito comprobado”.

ALBERTO SOTO
COMISIONADO MACROZONA

MARIO ROJAS M. Y DAVIED JAIME

“Estamos haciendo zanjas, el Ejército está con maquinaria propia y un plan que se va a desarrollar durante 90 días. Se suman contratos que hay vigentes, y los que vendrán, para renovar los complejos fronterizos como Chacalluta, que está con un contrato iniciando obras para que podamos, esperamos en un año y medio más, haberle cambiado la cara a la puerta norte”.

“Acá estamos entre el Hito 2 y el Hito 10, que es una zanja para impedir la movilidad, el tráfico de personas y el tráfico de comercio ilícito, tanto de mercaderías, drogas, armas. La primera etapa son 33 km de zanja, habrá que mantenerla y en las siguientes etapas (...) haciendo más barreras físicas para fortalecer nuestras fronteras de tal manera que Chile sea un país más seguro”.

Así describió y resumió el ministro de Obras Públicas, Martín Arau, el inicio y desarrollo de los trabajos, con apoyo del Ejército, en la implementación del plan Escudo Fronterizo, que comenzó el lunes 16 de marzo al norte de Arica, junto al límite internacional con Perú, para combatir la migración irregular y el crimen organizado.

Una iniciativa que también abarca a las regiones de Tarapacá y Antofagasta, junto a la frontera con Bolivia, y que en los últimos días sumó actividad en Colchane, a casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar.

Ahí, en el altiplano de Iquique, hay una zanja excavada durante años anteriores que será ampliada y reforzada con un muro adeñado, al igual que en Chacalluta. En los últimos días, el Ejército trasladó maquinaria pasada y se han sucedido reuniones de coordinación con autoridades locales, las que han presentado reparos.

El alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, pide que “se trabaje con la comunidad, porque como todo plan tiene ventajas y desventajas. Tiene que haber un resguardo del territorio y eso implica que nosotros tengamos que hacernos parte”.

La autoridad alude a “dos situaciones que podrían afectarnos. Uno, es el paso ancestral (usado para el intercambio co-

mercial con la vecina localidad boliviana de Pisiga y por menores de edad que cruzan la frontera para ir a clases) y, por otro lado, está el tema del ganado, sobre todo cuando construyen una zanja de esta envergadura”.

Contraloría fiscaliza en dos pasos habilitados en el altiplano

Casi 400 km al norte, en Arica, el alcalde Orlando Vargas señala que “la comunidad quiere saber cuáles serán los pasos a seguir y cuáles pueden ser las repercusiones de una medida como esta. Es importante que de una vez por todas paremos el ingreso ilegal de camiones con la mosca de la fruta, la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, que se han transformado en flagelos”.